Hoy se define el futuro económico del PVEM

1500
San Juan del Río.-El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), podría perder hoy los 67 mil pesos mensuales que percibe normalmente, si la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no le da la razón en el juicio que mantiene este partido político con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

Armando Pimentel, presidente del comité municipal del verde ecologista en San Juan del Río, explicó sin embargo que "la moneda aún está en el aire", por la "mala interpretación" que le dieron los funcionarios del IEQ a la Alianza que mantuvo el Partido Verde con el Revolucionario Institucional en los comicios del pasado 2 de Julio.

"Lo que sí te digo es que vamos a dar la lucha por mantener nuestro registro. Porque si bien es cierto que la votación no fue la óptima, sí alcanzamos el porcentaje mínimo para obtener el registro. Lo que ocurre es que nos estamos enfrentando a la mala interpretación que la dieron los integrantes del IEQ a la cláusula que regía la coalición con el PRI", comentó Armando Pimentel.

El dirigente agregó que la participación de la diputada y presidenta del Partido Verde en Querétaro, María de Jesús Ibarra será "de vital importancia" para seguir manteniendo las prerrogativas económicas: "Aquí es importante decir que lo que está en juego no es el membrete del partido verde, si no las prerrogativas. El IEQ, tiene la última palabra para no perder éste financiamiento público al que tenemos derecho", manifestó Armando Pimentel.

Los gastos operativos que eroga el Partido Verde en San Juan del Río ascienden a 5 mil pesos mensuales, de los cuales el 90 por ciento son cubiertos, precisamente con las prerrogativas que brinda el IEQ, sobre ello Armando Pimentel enfatizó la posibilidad de que los regidores del PVEM podrían dar un "incentivo extra", si la resolución que hoy se conocerá es contraria a lo esperado por los dirigentes y militantes.

"Si nos vamos a un escenario pesimista y consideramos que el IEQ nos quite nuestras prerrogativas, estaremos pidiéndoles a nuestros regidores que nos apoyen más decididamente", confesó el dirigente quien además adelantó algunas "medidas drásticas" ante éste posible escenario.

"Nos tendríamos que apretar el cinturón. Más sin embargo lo haríamos con mucho gusto, porque no es la primera vez que estaríamos en las trincheras del partido. Pero no estamos solos, porque hay gente que siempre ha estado interesada en los temas ecológicos y allí vamos a dar la pelea", concluyó Armando Pimentel.

En el caso del regidor panista Jonathan Juárez

Enfrentarán diputados "errores" de LIV Legislatura

Los ex legisladores incurrieron en omisiones, incongruencias, fundamentación, incumplimiento y violaciones a por lo menos 9 disposiciones legales

Ana Soria

Se rán por lo menos nueve asuntos los que deberán estudiar los diputados integrantes de la Comisión Instructora, Jaime César Escobedo Rodríguez (PRI), Leodogario Ríos (PRI), Ricardo Martínez Rojas Rustrian, Adriana Fuentes Cortés y Fernando Urbola Ledesma (PAN), de la solicitud de revisión al proceso administrativo que decidió archivar la LIV Legislatura local, relacionado con el regidor panista Jonathan Juárez Lugo.

Y es que de acuerdo al documento de la solicitud de revisión enviada por el anterior Ayuntamiento de Querétaro, los ex diputados Blanca Mancera, y Gregorio López (PRI), Horlando Caballero (PRD), Apolinar Castillas (PAN), y José Luis Aguilera (PC) incurrieron en omisiones, incongruencias, falta de motivación y fundamentación, incumplimiento y violaciones a por lo menos 19 disposiciones legales al momento de dar carpetazo a este asunto.

La primera tiene que ver con la omisión al remitir este asunto al pleno para su discusión y votación por parte del resto de los diputados, a pesar de que en el dictamen emitido, los diputados responsabilizan administrativamente a Jonathan Juárez por exhibir facturas apócrifas para justificar gastos por 59 mil 879.61 pesos, lo cual está acreditado en la foja número 27, pero no imponen una sanción al

argumentar "que no existe prueba... que demuestre que el regidor cometió conductas ilícitas".

No obstante, dan valor probatorio "a todas las pruebas" documentales que aportó el Ayuntamiento de Querétaro, que consistieron en presentar las 45 facturas "apócrifas" que presentó, Juárez Lugo para comprobar ministraciones mensuales y gastos médicos menores las cuales emitió de febrero a septiembre de 2004 y de enero a marzo de 2005, lo cual de acuerdo a las argumentaciones de las autoridades municipales, le hace sujeto de una responsabilidad administrativa, penal o civil basándose en el artículo 113 de la constitución mexicana y en 40 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Aunque más adelante, los ex legisladores señalan que no existe prueba alguna que demuestre fehacientemente que el regidor es responsable de algún ilícito.

En este sentido, la Comisión Instructora determina que al no existir pruebas que culpen en términos del Código Penal, se declaran incompetentes, pero el Ayuntamiento de Querétaro responde que este es un asunto meramente administrativo, por lo que de acuerdo a los 108 al 114 de la Constitución Federal un Dservidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones, de manera autónoma.

Además, se menciona que los legisladores pasan por alto que el regidor panista no presentó sus pruebas y alegatos en su defensa para desvirtuar los que presentó el Ayuntamiento de Querétaro, cuando fue emplazado por la Comisión Instructora.

Debido a que estos actos se cometieron cuando el inculpado estaba en servicio en el Ayuntamiento de Querétaro y a pesar de que el 30 de septiembre pasado concluyó su encargo, es sujeto aún de responsabilidad por uno o 5 años siguientes -según

sea el daño causado al erario público-, de acuerdo al artículo 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que es un tema que deberá continuarse por los diputados integrantes de la Comisión Instructora.

Argumentos del Ayuntamiento 2003-2006 al dictamen de la Comisión Instructora:

1. De acuerdo al artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder legislativo establece como atribución exclusiva del Pleno de la Legislatura, dictar resolución correspondiente, pero la LIV no siguió las reglas establecidas en el asunto relacionado con la suspensión, inhabilitación o revocación del regidor Jonathan Juárez Lugo, debido a que en ningún momento se remitió el caso al Pleno de la Legislatura para su discusión y votación, impidiendo de esta forma que fuera el propio Pleno quien dictara la resolución correspondiente y que por cierto es la única autoridad competente para tal efecto.

2. La Comisión Instructora determina la existencia de responsabilidad administrativa, disciplinaria y resarcitoria del daño al regidor Jonathan Juárez Lugo, pero omite imponer al servidor público sanciones administrativas. Lo cual queda demostrado en la foja número 27 de la resolución en su párrafo primero.

3. La Comisión instructora determina que las pruebas aportadas por el Ayuntamiento de Querétaro demuestran fehacientemente esas conductas ilícitas o constitutivas de responsabilidad, pero posteriormente se contradice al establecer que no existe prueba fehaciente que demuestre esas conductas.

4. La Comisión Instructora cae en el error de considerar que para que Jonathan Juárez Lugo sea responsable administrativamente, primero debió acreditarse la comisión de un delito, pero en el artículo 41 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del estado, no se esta-

4. La Comisión Instructora cae en el error de considerar que para que Jonathan Juárez Lugo sea responsable administrativamente, primero debió acreditarse la comisión de un delito, pero en el artículo 41 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del estado, no se establece como una condición, basta que se incumpla cualquiera de los principios constitucionales y obligaciones que contiene el artículo 40 de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado para que ese servidor público incurra en responsabilidad administrativa y de lugar a la aplicación de las sanciones también de carácter administrativo. Los diputados además pasan por alto la conducta del regidor consistente en la exhibición de facturas apócrifas para justificar gastos de febrero a septiembre de 2004 y de enero a marzo de 2005.

1/2

5. El Ayuntamiento de Querétaro carece de facultades para conocer sobre la comisión de conductas tipificadas como delitos, por tanto es la Legislatura la única instancia -en este caso- la que debía aplicar sanciones administrativas de carácter disciplinario y resarcitorio.

6. Se pasa por alto que el regidor no ofreció medios de prueba para desvirtuar los medios de convicción, ni la acusación formulada ante la legislatura -no obstante de que fue emplazado por la comisión instructora para que alegara lo que a su interés conviniera y ofreciera medios de prueba.

7. Es evidente que las irregularidades administrativas cometidas por Jonathan Juárez Lugo, se realizaron en la época en que fue regidor en el Ayuntamiento de Querétaro, y por tanto es innegable que la Legislatura contrario a lo manifestado por la Comisión Instructora, es la autoridad competente para aplicar sanciones administrativas. Si bien es cierto que concluyó su mandato constitucional el 30 de septiembre, también lo es que las irregularidades administrativas de carácter disciplinario y resarcitorias que se le imputan y que están demostradas, las realizó durante el lapso de tiempo en que desempeñó su encargo. Por lo tanto, aún es sujeto de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

8. Se basan en una ley inexistente cuando definen que el Ayuntamiento de Querétaro, no probó semejante conducta ilícita, la cual confunde con irregularidades administrativas, mismas que se sancionan de acuerdo a lo que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas. Por lo tanto el Ayuntamiento de Querétaro desconoce a qué irregularidades administrativas se refiere.

9. Al no existir prueba alguna que demuestre la ilicitud de la conducta del regidor en agravio del ayuntamiento de Querétaro es indudable que no es aplicable la fracción X del multireferido artículo 41 de la ley orgánica municipal, pero la Comisión Instructora señaló responsabilidad administrativa y dio valor probatorio a todas las pruebas que presentó la autoridad.

Aunque advierten que seguirá en discusión

Rechazan reducir edad para ser diputado

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, buscaban reducir la edad de 21 a 18 años para poder ser candidato a diputado local

20 Estrella Álvarez

Fue rechazada la propuesta de disminuir la edad para quienes buscan ser diputados locales, en donde buscarían establecer que fuera de 18 años.

A través de un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, buscaban reducir la edad de 21 a 18 años para poder ser candidato a diputado local.

El principal argumento es que la actividad legislativa y la responsabilidad que se ejerce al ser integrante se satisface actualmente con el límite de edad de 21 años de edad.

Se señala que ciertamente se debe continuar discutiendo la posibilidad de reducir la edad límite señalada, en virtud de la importancia y presencia que día con día van teniendo los jóvenes en la toma de decisiones que benefician a nuestro Estado.

En cuanto a proponer una mayoría calificada de dos tercios de la Legislatura para proceder en los casos de juicio político y de declaración de procedencia en contra de los Consejeros electorales del Instituto Electoral de Querétaro, los diputados consideraron que la mayoría por la que los diputados pueden proceder en caso de juicio político o declaración de procedencia debe ser general para todos los cargos públicos que señalan los artículos 97 y 98 de la Constitución Local.

Esto debe ser sin hacer diferencia entre uno u otro cargo, pues todos son importantes y atienden a una alta responsabilidad política.

Ayudarán a funcionarios en declaración patrimonial

Querétaro

3M

Redacción

El Secretario de la Contraloría, Ricardo del Río Trejo, presentó el Programa de Acciones que la dependencia a su cargo desplegará en apoyo de las 18 Alcaldías de la entidad, con la finalidad de que los trabajadores municipales entreguen en tiempo y forma su Manifestación Patrimonial de Bienes Anual 2006.

Durante esta reunión, el Secretario de la Contraloría, explicó a los representantes de los Órganos Internos de Control Municipal la importancia que representa para la transparencia de la administración pública que sus funcionarios cumplan con la obligación de dar a conocer su evolución patrimonial.

El Contralor del Estado explicó a los servidores públicos municipales los plazos y la forma de entrega de la Manifestación Patrimonial de Bienes Anual 2006. Además, adelantó que se instalará una oficina receptora itinerante en distintos municipios, con el objetivo de que los trabajadores den cumplimiento con esta obligación.

Finalmente Del Río Trejo, señaló que con estas acciones se fortalece la relación institucional de Gobierno del Estado y las 18 Administraciones Municipales.